



KAWAY

Boletín de Análisis de la Coyuntura

Número **3**, enero de 2012

Índice

Presentación, p. 1

2012 en Ecuador: un largo año electoral, p. 2



forlocal IV

Programa de formación para el
desarrollo local en el Ecuador

CIUDAD 
Centro de Investigaciones

Brot
für die Welt

PRESENTACIÓN

En este número de **KAWAY** presentamos un balance de la situación sociopolítica ecuatoriana durante el año 2012, un año marcado enteramente por las venideras elecciones de 2013. Ciertamente es que la campaña se abre formalmente en enero de 2013, pero ya desde fines de 2011 se dio largada a la carrera electoral con el anuncio de la candidatura de Rafael Correa como aspirante a la reelección. ¿En qué ambiente se producirán esas elecciones? ¿qué está en juego en ellas? El artículo que presentamos en este número reflexiona sobre eso.

2012 en Ecuador: un largo año electoral

Mario Unda

1. Un largo año electoral



El 2012 fue un año electoral. En cierto modo, atípico: la campaña se instaló en la vida política con mucha anticipación, dado que las elecciones se realizarán el 17 de febrero, y la campaña arrancaría el 4 de enero; pero en octubre dio inicio oficialmente el período electoral, con la convocatoria a elecciones realizada por el Consejo Nacional Electoral. No obstante, siendo un año electoral, el 2012 empezó aún antes. En la víspera del día de inocentes, la entonces ministra Coordinadora de la Política, Betty Tola, dijo que, “con toda seguridad”, Correa sería candidato a la reelección. El propio Correa pretendía ponerle un poco más de suspenso al anuncio: un par de semanas antes, como quien solamente reflexiona sobre el asunto, había dicho que “Nuestra principal responsabilidad es darle continuidad al proyecto político. No puede detenerse la revolución ciudadana y si perdemos las elecciones se detendría esa revolución. [...] Si alguien más lo puede hacer, en buena hora, sino tendré que ir yo”¹. Una obligación buscada e inevitable se diría. Año atípico, pues empezó en diciembre de 2011 y culminará el 17 de febrero, con la realización de las elecciones.

¹ <http://www.eluniverso.com/2011/12/27/1/1355/ministra-tola-dice-rafael-correa-presentara-reeleccion.html>

Por otro lado, no tan atípico después de todo: si bien se mira, hemos pasado en campaña electoral permanente desde las elecciones de 2006, cuando, en dos vueltas (15 de octubre y 26 de noviembre), Correa fue elegido presidente de la República. En seguida, el 15 de abril de 2007 se realizó un plebiscito en el cual la población se pronunció a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A continuación, el 30 de septiembre del mismo año, se eligieron los asambleístas encargados de redactar la nueva Constitución, y Alianza País obtuvo una amplia victoria. Un año después, el 28 de septiembre de 2008 se realizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. Más tarde, el 26 de abril de 2009 se llevaron a cabo nuevas elecciones generales, con un nuevo triunfo de Correa y de AP. Por último, el 7 de mayo de 2011 el pueblo respondió a una consulta popular, con 10 preguntas, cuyo núcleo central, según dijo el propio Correa, se dirigía a permitirle “meter las manos en la justicia”. Aunque triunfó en todas las preguntas, Correa vio reducirse su margen de ganancia y perdió prácticamente en la mitad de las provincias. ¿Marca eso una tendencia? ¿Las elecciones de 2013 mostrarán una recuperación de su capacidad hegemónica? ¿Sobre qué bases?

Dado que, a fin de cuentas, el correísmo ha ganado todas esas elecciones, puede decirse que los procesos electorales han sido el principal medio de legitimación del correísmo.

Año electoral típico y atípico al mismo tiempo. Pero no se trata de la única paradoja. Otra, quizás más decidora de las transformaciones que se están produciendo en el Ecuador, es el ambiente poco democrático y despolitizado del proceso electoral. ¿Cómo puede ser esto posible?





2. Despolitización y ambiente poco democrático

Se trata de unas elecciones que se realizarán en condiciones muy difíciles, sobre todo para la oposición de izquierdas. Más allá de la existencia de una Corte Nacional Electoral controlada por el oficialismo, el diseño mismo del proceso no favorece ciertamente una contienda democrática. La campaña resulta muy corta, sobre todo para las candidaturas que cuentan con pocos recursos, y beneficia a los candidatos con recursos y “posicionamiento” previo; y el tiempo disponible (42 días) no se presta para debates serios y profundos en el pueblo, en sus espacios de socialización y organización. Más aún cuando la profusión de propaganda oficial, de un carácter poco disimuladamente electoral, genera una disparidad de partida muy notoria. Además, las reformas recientemente aprobadas para la distribución de escaños (método D'Hont y distritalización de las provincias de mayor población) significan un claro retroceso, porque favorecen excesivamente a las opciones más votadas y reducen de modo significativo las posibilidades de representación de las minorías, generando una distorsión en la representación política.

Además esto ocurre teniendo como piso y telón de fondo un notorio proceso de despolitización que se extiende en la conciencia social. El ambiente participativo que acompañó el proceso constituyente es ya cosa del pasado, y no parece que pueda revivirse. Las acciones gubernamentales han contribuido a acentuar, si es que no a crear, ese ambiente: desde el paternalismo que expropia toda actoría a la población y a sus organizaciones, hasta el autoritarismo que limita desde arriba las posibilidades de participación decisoria y, sobre todo, la criminalización de la protesta social, todo apunta a una presencia pasiva de la población en la política. En los primeros meses del año, a las puertas de la marcha por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos, la

policía realizó un operativo en el que detuvo a 10 jóvenes a los que acusó, como a otras decenas de luchadores sociales, de terrorismo. Las indagaciones y el juicio se extenderían durante todo el año, y quedarían para resolverse luego de las elecciones: un amedrentamiento persistente. Pero también hay otro elemento de temor: el temor a perder el empleo, a perder contratos. Temor político y judicial, por un lado, temor socioeconómico por otro: un extraño ambiente planea sobre las condiciones en que se desenvuelve la acción social, inhibiendo las ya limitadas condiciones de participación.

Pero aún un elemento adicional debilita la participación de la sociedad: el acomodamiento al crecimiento económico, cierta prosperidad de sectores de ingresos medios, la ampliación del consumo en capas populares de la población.

Todo esto se combina con el claro desplazamiento del discurso correísta a los tópicos y énfasis conservadores: el orden, la majestad del poder, la concentración de las decisiones en pocas manos, la inseguridad, la deslegitimación de la organización y de la lucha.

Así, una nueva paradoja, que se viene incubando desde antes, se perfila con mayor claridad. Es probable, casi seguro, que Correa será reelegido. Pero el respaldo numérico no significará un fortalecimiento de su capacidad de movilización, pues se trata de un respaldo cada vez más construido sobre la base de un espíritu conservador y pasivo.

De manera que, contrariamente a lo que pudiera pensarse, serán unas elecciones que ocurrirán en un ambiente de despolitización. Pero en un ambiente así, ¿qué es lo que está en juego?



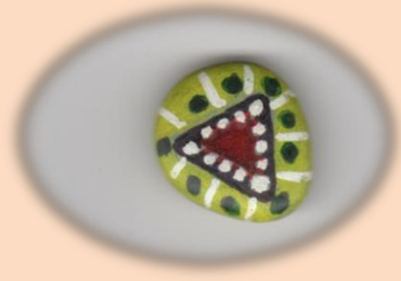
3. En este ambiente, ¿qué está en juego?



a. Desde la formación del nuevo “mapa político”, está en juego la reconstrucción del sistema de partidos. Al final del período anterior, el viejo sistema de partidos hizo agua y se desplomó. De allí surgió Alianza País como fuerza dominante, como aquella que sería capaz de rehacer el dominio político en beneficio de los intereses generales de las clases dominantes, como veremos luego. Si la comparamos con la situación anterior, diríamos que Alianza País ocupa un lugar mixto, en parte, reemplaza al antiguo “centro izquierda” (básicamente, la Izquierda Democrática); pero, también en parte reemplaza ciertas expresiones populistas que en su momento se presentaron como progresistas (el CFP de Roldós, la primera fase del roldosismo de Bucaram); de igual manera, recoge a un sector de la izquierda, aquella que siempre estuvo presta a sumarse a proyectos de apariencia “progresista”; y, por último, ocupa también una porción del espacio de la política conservadora. Esta imagen variopinta ha llevado a la confusión a mucha gente, que se ha dejado llevar por las características secundarias (las obras), olvidando y negando el contenido profundo del nuevo proyecto de dominación, es decir, su carácter de modernizador del capitalismo.

Por otro lado, el juego de las encuestas deja entrever un interés compartido por el gobierno y por la derecha: crear un escenario político más proclive para la gobernabilidad, el bipartidismo. Un viejo sueño de las mentalidades conservadoras esclarecidas que pudiera convertirse en realidad, superando la fragmentación de las expresiones políticas sobre la base del reconocimiento de la continuidad de la modernización capitalista. En este marco, ¿qué espacio quedará para las izquierdas?

b. Para la derecha, está en juego el “nuevo rostro” que presentará a la sociedad. Las derechas han tardado un buen tiempo en la búsqueda de una expresión que se corresponda con la nueva situación. Sus partidos tradicionales, centrados en la defensa del programa neoliberal, no han logrado levantar cabeza y parecen estar de retirada, tanto su principal formación política tradicional, el partido socialcristiano, cada vez más reducido en sus posibilidades de representación nacional, cuanto las expresiones más “populistas” y clientelares, el PRIAN y el PSP que, por distintas razones, no llenan las expectativas de este sector: el PRIAN, porque es poco más que una extensión política de los intereses particulares de Álvaro Noboa; el PSP porque representa el aventurerismo político que quiere presentarse como el mejor defensor posible de los intereses de los grupos dominantes, en la medida en que, por lo menos hasta las elecciones de 2009, había logrado mantener un peso electoral significativo². Por eso han intentado, primero con poco éxito, presentar caras más “modernas”, menos ligadas *aparentemente* con el pasado. Primero fueron Futuro Ya (de Pablo Lucio Paredes) y Uno (de Maruri y Montaña), pero fracasaron. Más adelante lo han intentado con Concertación, que tampoco logró cuajar plenamente pese a la buena prensa con que ha gozado, e incluso quedó por fuera de la inscripción electoral. Y ahora lo intentan con dos nuevos movimientos: Creo y Suma, con los cuales parecen estar mejor encaminados. Representan una derecha “moderna”, es decir, que también tiene como horizonte la modernización capitalista y que, desde ese punto de vista, no es más que la otra cara del proyecto correísta. Por eso es coincidente con la nueva posición de los gremios empresariales frente al gobierno,

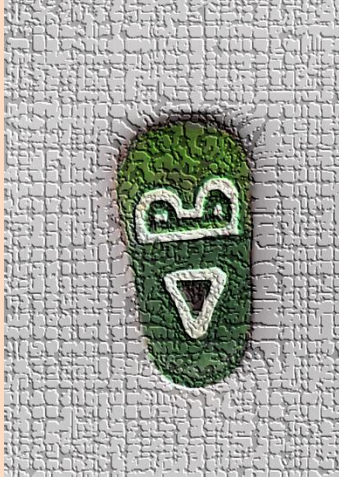


² Pero en este caso debe hacerse una salvedad: la votación de Lucio Gutiérrez, candidato del PSP en las elecciones de 2009 estuvo “inflada” por la carencia de expresiones políticas orgánicas, propias de las clases dominantes. La situación ahora es distinta por la presencia de Lasso (CREO) y Rodas (SUMA).

centrada más en el diálogo y en la negociación que en la confrontación, dado que, sobre lo fundamental, existe un acuerdo entre ellos.



- c. **También para las izquierdas se juega la posibilidad de una reconstitución.** El proyecto correísta aceleró la crisis de la antigua izquierda, porque atrapó en sus redes a una parte de ella, rompiendo la unidad que difícilmente se había ido construyendo al calor de la resistencia social contra el neoliberalismo. La izquierda, como posibilidad de un proyecto independiente de las diversas opciones de modernización capitalista ha quedado seriamente debilitada. Como debilitadas están las expresiones políticas de izquierda que se han mantenido al margen del embelesamiento correísta, y las organizaciones sociales, duramente golpeadas por los afanes oficiales de cortar de raíz cualquier posibilidad de movimiento popular autónomo. Pero un proyecto de modernización capitalista como el que impulsa el correísmo genera también conflictos y contradicciones: alrededor del manejo y del control de los recursos, alrededor de la participación, alrededor de la defensa de la independencia y de la autonomía de las organizaciones sociales, en contra de un proyecto de disciplinamiento autoritario de la sociedad. Por eso, han vuelto a ponerse en marcha las movilizaciones sociales, y estas han alentado el reencuentro de las izquierdas. La Unidad Plurinacional es ahora esa posibilidad, que empieza a recorrer un camino escarpado y difícil. Se juega, incluso, la posibilidad de su propia continuidad.



d. **Desde la perspectiva del gobierno**, lo que estará en juego, obviamente es la afirmación del proyecto de dominación que construye el correísmo, una afirmación que, en las actuales condiciones únicamente puede ser una afirmación conservadora. Básicamente, se verá si logra mantener controlada la mentalidad y la conciencia de la mayoría de la población detrás de su proyecto de modernización capitalista.

Un proyecto que, en su discurso, pone el énfasis en la *recuperación del Estado* como proveedor de condiciones generales de la producción y de la reproducción del sistema: grandes obras de infraestructura, dinero barato, suficiente circulante en el mercado, fuerza de trabajo disciplinada, sociedad gobernable. En este punto, la diferencia central respecto al modelo neoliberal anterior parece ser, *a)* el papel motor de la economía: por el impacto de las inversiones de las inversiones públicas, que pueden “jalar hacia adelante” la producción y la circulación de capitales (el mejor ejemplo ahora es el acelerado crecimiento de la industria de la construcción); y, *b)* la imposición, desde el Estado, de condiciones “normales” de explotación del trabajo y de relación entre el capital y el Estado. De este modo, el Estado *parece* regir la economía.

Con esta cobertura, El gobierno les ofrece a los grandes capitalistas un Estado que sea capaz de responder a las *necesidades estratégicas* que se desprenden del momento particular de desarrollo del capital.

En primer lugar, un gobierno “moderno” en un Estado “moderno”, es decir, un Estado que vele por los intereses generales de la clase dominante, y no sólo por los intereses de un puñado de familias, como ocurrió en el período anterior. Para cumplir este cometido puede tener que enfrentarse –como lo ha

hecho- con ciertos sectores de la burguesía (por ejemplo, con la banca, que, de cualquier modo, ha acumulado ingentes ganancias).

En segundo lugar, un Estado que desarrolle las condiciones generales que requieren los capitales para desarrollar sus negocios. Estas condiciones generales están relacionadas generalmente con grandes obras de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, refinerías,...), necesarias para todos los empresarios, pero demasiado costosas como para que cada uno las resuelva por sí mismo.

En tercer lugar, un Estado que facilite la expansión de los mercados, tanto hacia el mercado exterior como hacia el mercado interno. Para ampliar las



posibilidades de mercado externo, el gobierno ha definido que el comercio es su prioridad en las relaciones diplomáticas, ha abierto o acercado relaciones con otros mercados distintos a Estados Unidos y Europa; esto resulta de importancia ahora, cuando la crisis del capitalismo mundial golpea con particular fuerza justamente a Estados Unidos y a Europa. Y, sobre todo, apuesta a la conformación de un bloque regional que, en líneas generales, sigue los movimientos reales del capital que, en estos últimos 20 años, se ha regionalizado de modo

acelerado. De este modo, se da continuidad, en la política del Estado, del movimiento objetivo de los capitales, que se han regionalizado y transnacionalizado en el último período.

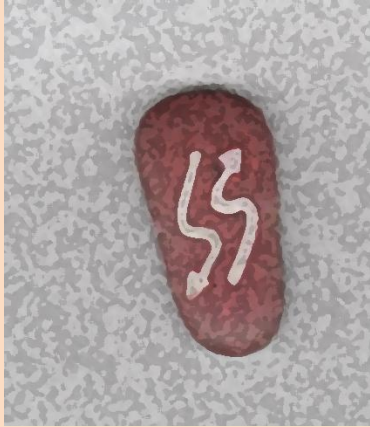
En cuarto lugar, la generación de incentivos para el desarrollo de nuevos campos de negocios para el capital, sobre todo tomando en cuenta los cambios que se producen en el orden capitalista mundial. Esto puede apreciarse claramente en el Código de la Producción, en el Plan Nacional de Desarrollo, o en la propuesta de la creación de las ZEDES,...

En quinto lugar, la disposición de fuerza de trabajo disciplinada. Eso se consigue desde las políticas laborales del régimen que combinan varios

elementos: la fragmentación de los trabajadores en trabajadores públicos y privados, para evitar su constitución en sujeto; el enfrentamiento de los trabajadores públicos de cara a los “ciudadanos”, debilitando sus posibilidades de organización y de acción reivindicativa; pero también dando satisfacción a ciertas aspiraciones de los trabajadores, represadas en el período anterior, como mejores salarios y posibilidades organizativas (para los trabajadores del sector privado), es decir, desactivando ciertas inconformidades sociales. Al mismo tiempo, se mantienen espacios de trabajo flexibilizado, en el sector privado disfrazado ahora de encadenamientos productivos y de negocios inclusivos, y en el sector público disfrazado de contratos por tiempo fijo.

En sexto lugar, la subordinación de las economías familiares, de las pequeñas e incluso medianas economías a la lógica de la acumulación de los grandes capitales, a través de los encadenamientos productivos, negocios inclusivos, etc.

Y, por último, pero no lo menos importante, el disciplinamiento autoritario del pueblo. Este se consigue a través de dos mecanismos, aparentemente contradictorios, pero en realidad complementarios: por una parte, la atención de algunas demandas sociales, negadas en la época neoliberal; a esto junta una acción claramente clientelar, que le permite hacer pie en un conjunto de sectores sociales generalmente desarticulados, con poca capacidad de organización y casi ninguna posibilidad de representarse políticamente por sí mismos. Todo ello le permite legitimar su accionar con una imagen progresista y “popular”. Pero, por otra parte, a través del conjunto de mecanismos que se conoce como “criminalización de la protesta social”; es decir, la deslegitimación, las reformas administrativas para asegurar su sometimiento al Estado y a los dictados del gobierno, las reformas legales para penalizar las acciones de protesta, la represión policial y militar, y el



enjuiciamiento. La criminalización de la lucha social le es necesaria al régimen para desarticular las posibilidades de encuentro del movimiento popular

e. Desde la perspectiva de las organizaciones y movimientos populares, por lo tanto, se juega *el derecho a organizarnos, a defender nuestros derechos, a protestar y a resistir*; el proyecto del gobierno, como hemos visto, incluye

el control de las organizaciones populares desde el Estado, someterlos a la voluntad del gobernante. El ansia de controlar a las organizaciones llega al extremo de darle al presidente de la república el derecho de desaparecer a las organizaciones.

En consecuencia, para los movimientos sociales en estas elecciones estarán en juego *las posibilidades de recomponer un movimiento popular independiente y autónomo, es decir, con capacidad de organizarse por sus propios intereses, de representarse por sí mismo*. Como ya vimos, el proyecto del gobierno no tolera la presencia de organizaciones y movimientos con propuestas propias, con voz propia. Es una cuestión central que, atravesada por la contienda electoral, va más allá de ella.